

Las eléctricas alertan que la mochila fiscal pone en riesgo el sector nuclear

Foro Nuclear, lobby que agrupa el sector, e Iberdrola sostienen que las cargas de impuestos se comen la mitad de los ingresos

A. CARALT/AGENCIAS

Declaraciones cruzadas de los presidentes de Iberdrola y Endesa a cuenta del futuro de la central nuclear de Garoña han copado titulares y páginas de los periódicos durante los últimos días. No se trata de un asunto menor, ni se ciñe al ámbito de la región burgalesa de Santa María de Garoña. Se discute la viabilidad futura de todo el parque nuclear español, «asfixiado» por impuestos y tasas que gravan su actividad, en palabras del presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluze.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendió en la última junta de la sociedad que reabrir Garoña no es viable económicamente y ha pedido a Endesa, su socio en Nucleor, que desista de solicitar el permiso para retomar la actividad. Por su parte, Borja Prado, presidente de Endesa, ha tranquilizado los ánimos al anunciar que esperará la decisión que tome el Gobierno sobre la cuestión el próximo mes de agosto tras haber consultado a las partes y recibir las alegaciones de



Imagen del complejo nuclear de Ascó, en la comarca de la Ribera d'Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

sitios de seguridad exigidos por el organismo regulador.

Pero Sánchez Galán señala que no solo Garoña es inviable económicamente sino que la situación del resto del parque nuclear español «no es muy diferente». Y es que la filial Iberdrola Generación Nuclear está en «pérdidas, ya que el 50 % de los ingresos se dedica a pagar esas obligaciones. No se puede continuar con esta situación que supone operar centrales en pérdidas», ha sentenciado.

supera los 24.000 millones de euros. Para ello, aplicó un impuesto sobre la producción de residuos radioactivos proceden-

tes de las nucleares, que grava en 2.190 euros por kilogramo de uranio –la materia primera que se usa en estas instalaciones– del que se valgan. Esta figura detrae aproximadamente un 18 por ciento de los ingresos de las centrales. Además, se actualizó otro tributo sobre el almacenamiento de residuos –lo gestiona Endesa– que se lleva otro 15 %. Y para culminar, se introdujo un gravamen generalizado del 7 % para todas las fuentes de generación

participada por Endesa e Iberdrola y propietaria de las plantas catalanas, ha insistido en los últimos años en la voluntad de continuar operando como mínimo hasta los 60 años, más allá de 2030. Antes del 31 de diciembre de 2017, ANAV debe presentar un documento al CSN para la renovación de Vandellòs II y, antes del 31 de diciembre de 2018, para la de Ascó. Podría solicitar un permiso para operar, 10, 15 o hasta 20 años más. Entre 2020 y 2021 caduca la autorización en vigor para operar los dos complejos.

Iberdrola ha pedido en el seno de las sociedades que controlan las plantas de Vandellòs II y Almaraz (Cáceres) retrasar a 2019 el plazo para entregar la documentación para renovar la licencia. Alegaba que ante «el actual contexto» que vive el sector con «cambios regulatorios que han incrementado su carga fiscal» se hace imposible planear una ampliación de la actividad de ambas plantas en estos momentos. La pretensión ha sido rechazada por Endesa, cuyo aval era imprescindible para transmitir la petición al Gobierno. En el caso de la central extremeña, la petición de Iberdrola había sido respaldada por Gas Natural y EDP, los otros accionistas de su sociedad.

EL APUNTE

El análisis de los costes de las plantas nucleares

■ En total, la mochila fiscal pesa, de media, unos 10 euros por megavatio/hora (Mwh), según fuentes del sector eléctrico consultadas por la agencia Colpisa. A esa cifra habría que añadir los 35 euros/Mwh que supone mantener operativas estas instalaciones: entre 7 y 8 euros por el uranio, 7,5 euros por la tasa de residuos, otros 14 euros en gastos de explotación (personal y mantenimiento), y cinco euros en inversiones. «Si el coste de la energía en el mercado mayorista es de 45 euros, las nucleares cubren sus gastos y no dan para mucho más», sostienen las mismas fuentes. Para la planta burgalesa, sólo los costes de mantenimiento ascienden a entre 30 y 40 euros/Mwh, a los que hay que sumar los tributos.

Iberdrola, socio a medias con Endesa, considera que la reapertura de Garoña no es viable

los interesados.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió a principios de año un informe favorable a autorizar 14 años más la actividad de la central de Garoña, hasta el año 2031 cuando cumplirá los 60 años de su puesta en marcha. La planta está desconectada desde 2012 y sus propietarios deberían ejecutar inversiones por valor de unos 150 millones de euros para cumplir los requi-

Socios en ANAV

La afirmación no es gratuita aunque en Cataluña, Iberdrola es un socio menor de las plantas nucleares. Es propietaria del 15 % de Ascó II y del 28 % de Vandellòs II. Endesa generación es el socio mayoritario y el único propietario en Ascó II.

Foro Nuclear, lobby que agrupa las empresas del sector, sostiene que la mochila fiscal representa hasta un 50 por ciento de los ingresos que se perciben. «El Estado se ha comido los márgenes», defiende su presidente Ignacio Araluze.

A finales de 2012, el Gobierno aprobó una batería de medidas para atajar un déficit eléctrico –la diferencia entre ingresos del sistema y costes que asumía– que

ANAV ha insistido en los últimos años en que quiere continuar operando más allá de 2030

eléctrica. A esta lista hay que sumar cánones como el Impuesto de Bienes Inmuebles y otras figuras que abonan las centrales.

Y aún, en el caso de Cataluña, se le debe sumar el nuevo impuesto nuclear aprobado por el Govern de la Generalitat que prevé recaudar hasta 60 millones de euros de los tres reactores de Ascó y Vandellòs II.

Con todo, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV),